

Government at a Glance: Latin America and the Caribbean 2024



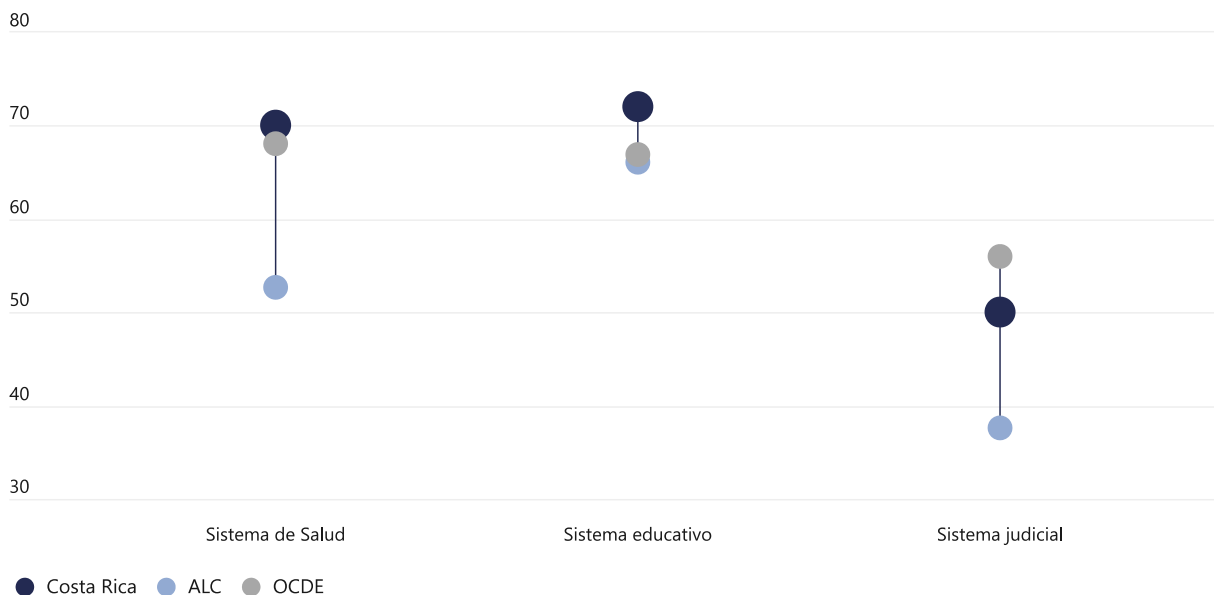
Costa Rica

Confianza y satisfacción con los servicios públicos

La confianza en las instituciones públicas y la satisfacción con los servicios públicos son resultados importantes de la calidad de la gobernanza pública. Reflejan la percepción que tienen los ciudadanos de la competencia del gobierno en el diseño de políticas públicas y la prestación de servicios, así como sus expectativas sobre el comportamiento de las instituciones y los funcionarios públicos. La satisfacción con los servicios públicos y la confianza en las instituciones públicas, aunque no son resultados necesarios de la gobernanza democrática, pueden mejorar la eficacia de la gobernanza fomentando la participación en la vida pública, el cumplimiento de las políticas públicas y la cohesión social.

Una gran mayoría de la población de Costa Rica está satisfecha con los sistemas educativo y de salud; la satisfacción con el sistema judicial está muy por encima de la media de ALC. Más de dos tercios de la población está satisfecha con el sistema educativo (72%) y de salud (70%), por encima de los valores promedio de los países de la OCDE (67% y 68%, respectivamente) y ALC (66% y 53%, respectivamente). La mitad de la población de Costa Rica está satisfecha con el sistema judicial, un porcentaje que supera ampliamente el promedio de ALC (38%).

Gráfico 1. Satisfacción con los servicios públicos, 2022






Buena gobernanza para la inclusión y la sostenibilidad

En una época de crisis múltiples, los países de América Latina y el Caribe necesitan adoptar prácticas de buena gobernanza que fomenten la inclusión y la sostenibilidad, elementos cruciales para promover la prosperidad y la resiliencia democrática. Entre las acciones clave están construir sobre las fortalezas de la democracia, incluyendo mejorar la participación de las partes interesadas en la toma de decisiones, así como fomentar la representación y la inclusión en la fuerza laboral pública. Además, los esfuerzos deben centrarse en reforzar las competencias clave para lograr un crecimiento inclusivo y sostenible, incluidos los enfoques presupuestarios y de contratación pública que apoyen la transición verde. Asimismo, la protección contra las amenazas a los valores democráticos exige que se mantengan normas eficaces de integridad pública y regulaciones sólida contra las influencias indebidas.

La contratación pública -la compra de bienes, servicios y obras por parte de los gobiernos y las empresas estatales- representó un promedio del 17.4% del gasto público total en los países de América Latina y el Caribe en 2021. Las administraciones públicas están adoptando cada vez más la contratación pública como instrumento de política estratégica para promover objetivos sociales, por ejemplo, para fortalecer la sostenibilidad y la responsabilidad medioambiental, favoreciendo la contratación verde y la conducta empresarial responsable, y para fortalecer la inclusión, incentivando la participación de diferentes grupos de personas y empresas como proveedores.

Costa Rica ha desarrollado una estrategia a nivel de gobierno central para promover la contratación pública verde, la conducta empresarial responsable y promover la participación de las PYME en los procesos de contratación pública. En comparación, 14 países de ALC cuentan con una estrategia del gobierno central para promover la participación de las PYMES en la contratación pública, 9 países para la contratación pública verde y 7 para la conducta empresarial responsable.

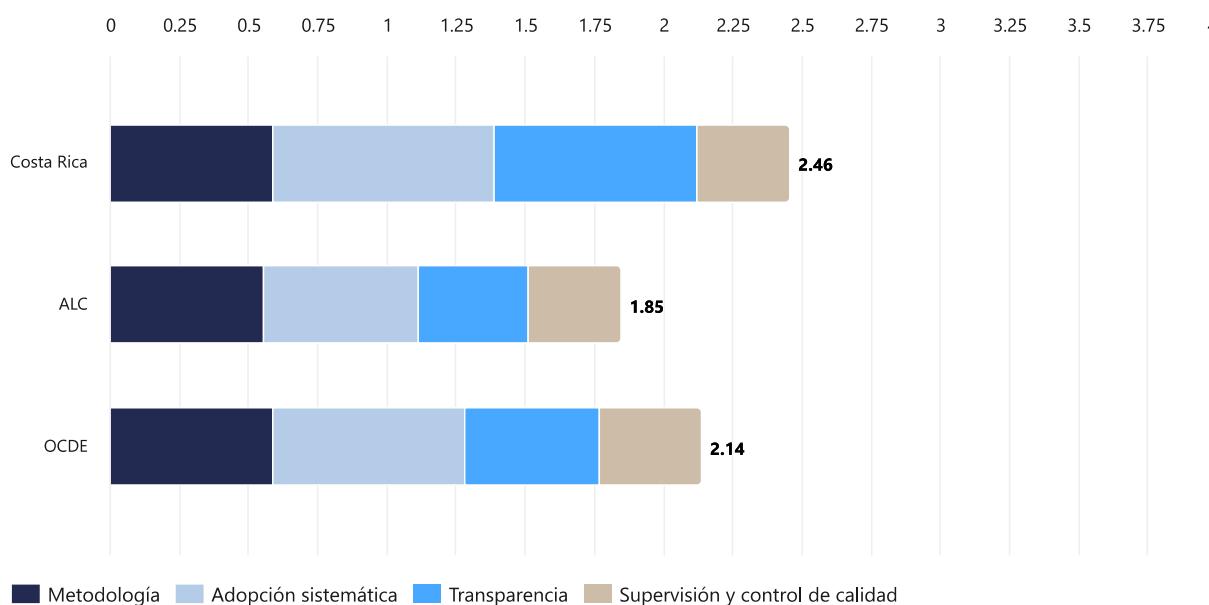
Gráfico 2. Contratación pública estratégica a nivel central para perseguir la sostenibilidad y la inclusión, 2022

	Compras verdes	PYME	Prácticas empresariales responsables
Se ha desarrollado una estrategia/política a nivel central	 Países de ALC: 9 Sí / 10 No	 Países de ALC: 14 Sí / 5 No	 Países de ALC: 7 Sí / 12 No
Algunas entidades de contratación han desarrollado una estrategia/política interna	Países de ALC: 6 Sí / 13 No	Países de ALC: 1 Sí / 18 No	Países de ALC: 3 Sí / 16 No
No hay estrategia o política	Países de ALC: 6 Sí / 13 No	Países de ALC: 7 Sí / 12 No	Países de ALC: 3 Sí / 16 No

Una participación significativa de las partes interesadas en la toma de decisiones contribuye a mejorar el diseño y la aceptación pública de las políticas y los servicios públicos. El Índice de Gobernanza y Política Regulatoria (iREG) de la OCDE evalúa la participación de las partes interesadas en la elaboración de regulaciones subordinadas (las aprobadas por el jefe de gobierno, los ministerios o el gabinete). Este indicador mide el desempeño de los países en involucrar sistemáticamente a las partes interesadas en la toma de decisiones públicas, el uso de herramientas, la transparencia de sus consultas y su supervisión y control de calidad. Entre 2019 y 2022, 8 de los 11 países de ALC encuestados (73%) mejoraron su puntuación iREG en participación de las partes interesadas.

Costa Rica tiene una de las puntuaciones más altas entre los países de ALC en el índice iREG de participación de las partes interesadas en la elaboración de regulaciones subordinadas. Su puntuación total de 2.46, en una escala de 0 a 4, es superior a los promedios de ALC (1.85) y la OCDE (2.14). Costa Rica obtiene buenos resultados en las dimensiones de adopción sistemática (0.8 sobre un máximo de 1) y transparencia (0.73), mientras que tiene margen de mejora especialmente en la metodología de participación de las partes interesadas (0.59) y en la dimensión de supervisión y control de calidad (0.34).

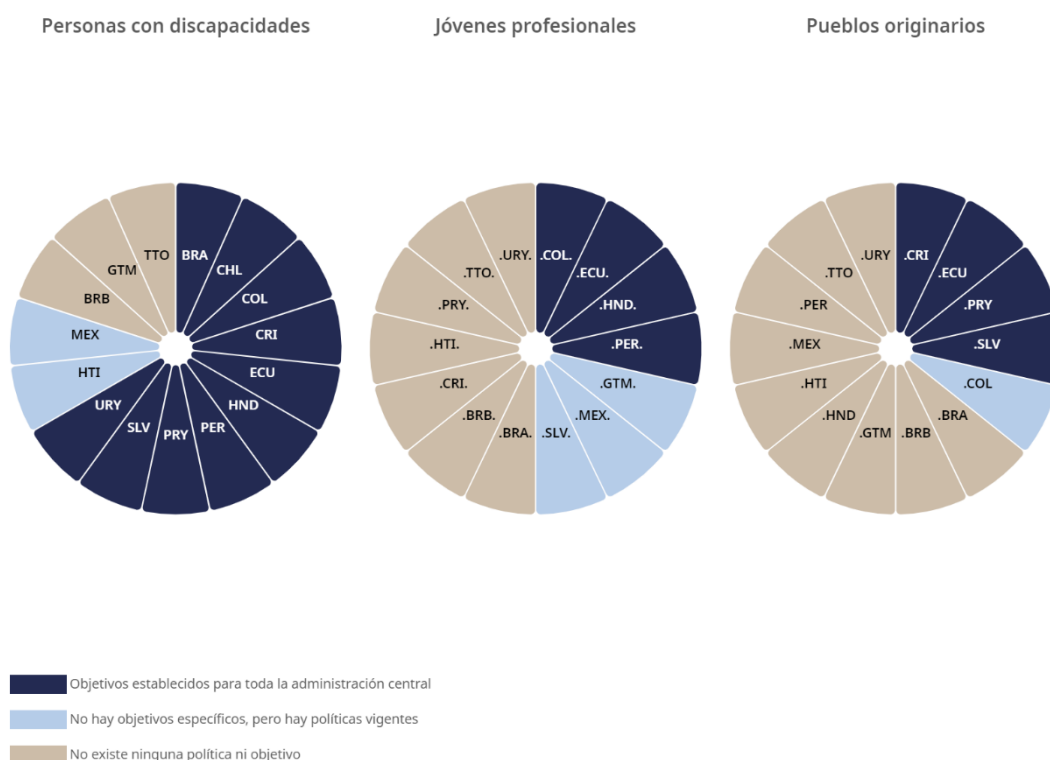
Gráfico 3. iREG sobre la participación de las partes interesadas en la elaboración de regulaciones subordinadas, 2022



Una fuerza laboral diversa en el sector público es esencial para promover la representación y la inclusión de los grupos infrarrepresentados y vulnerables. Refuerza el rendimiento del gobierno al impulsar la innovación y contribuir a servicios públicos adaptados a las necesidades de la comunidad. Los gobiernos pueden utilizar políticas y objetivos para contratar y retener a los grupos infrarrepresentados en la fuerza laboral.

Costa Rica ha establecido objetivos específicos para todo el gobierno central para la inclusión de las personas con discapacidad y pueblos originarios en la fuerza laboral pública; mientras que carece de políticas u objetivos para los jóvenes profesionales. Entre los países de ALC encuestados, 10 de 15 tienen objetivos para las personas con discapacidad, 4 países tienen objetivos para jóvenes profesionales y para pueblos originarios.

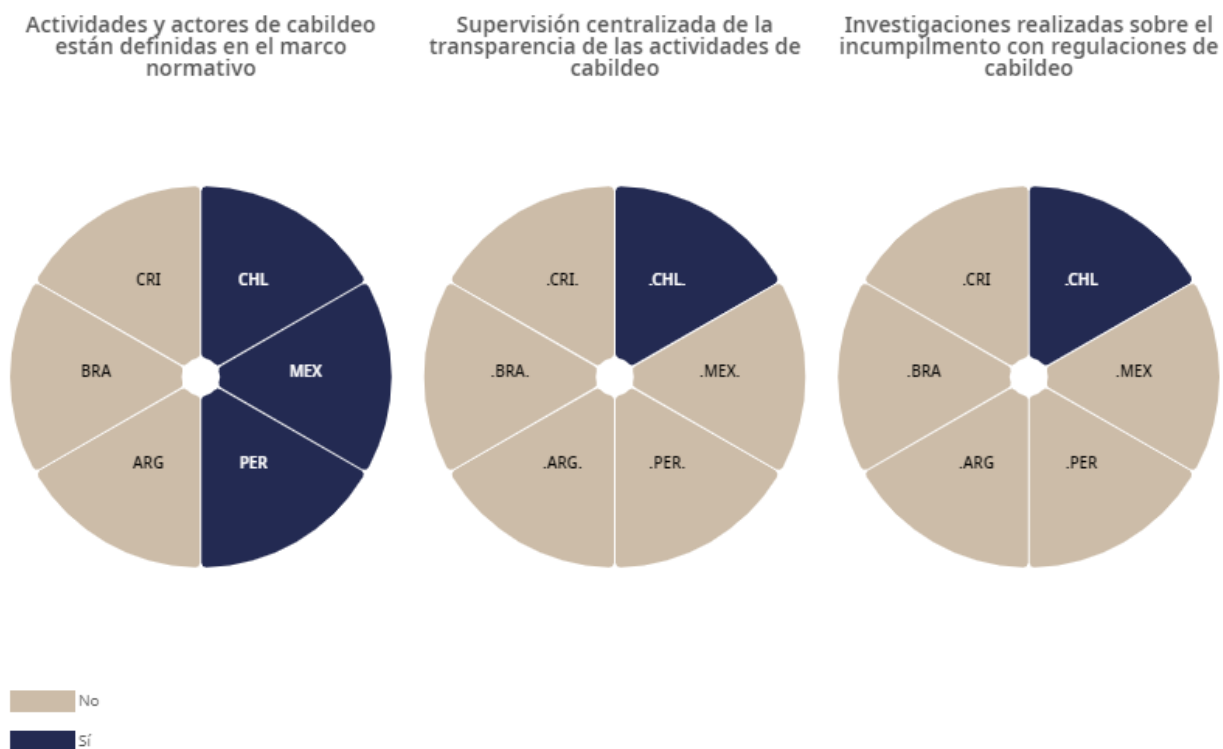
Gráfico 4. Políticas y objetivos para mejorar la representación de grupos específicos en la administración central/federal, 2022



El cabildeo forma parte de la democracia desde hace mucho tiempo, ya que facilita la representación de una serie de intereses y ayuda a identificar el impacto que las políticas tendrán en diversos grupos. Sin embargo, las políticas públicas sufren si las prácticas de cabildeo no son transparentes o no están reguladas, lo que permite a los grupos de interés monopolizar la influencia, manipular la opinión pública, influir en las decisiones gubernamentales y, en última instancia, obstaculizar la aplicación efectiva de las políticas públicas. Para que las regulaciones sobre cabildeo sean eficaces, los gobiernos deben supervisar su cumplimiento e imponer sanciones en caso de infracción. Al año 2022, tres de los seis países de ALC encuestados (50%) regulaban el cabildeo mediante la definición de sus actividades y actores. Sin embargo, la mayoría de los países de ALC carecen de instituciones y marcos regulatorios para supervisar las prácticas de cabildeo y no investigan las infracciones.

Costa Rica no define las actividades de cabildeo en su marco normativo, lo que hace más difícil impedir que los grupos ejerzan una influencia indebida. Además, no cuenta con un organismo encargado de supervisar la transparencia de las actividades de cabildeo y no ha llevado a cabo ninguna investigación por incumplimiento con las regulaciones de cabildeo en el último año calendario.

Gráfico 5. Regulaciones, supervisión y sanciones sobre cabildeo, 2022



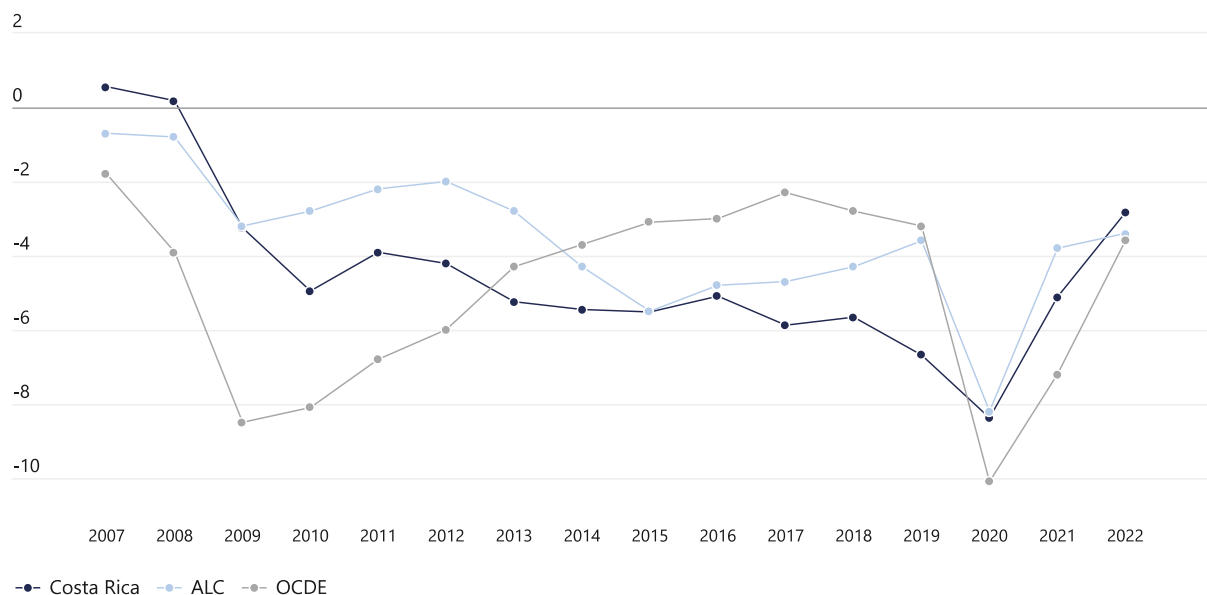
Uso y gestión de los recursos públicos

Para lograr avances significativos hacia un crecimiento inclusivo y sostenible, los gobiernos deben gestionar sus recursos existentes de forma estratégica. Desde una perspectiva fiscal, esto implica equilibrar cuánto gasta y cuánto recauda el gobierno. Desde la perspectiva de los recursos humanos, significa reforzar la capacidad y las competencias de los empleados públicos y crear una fuerza laboral pública y oficiales públicos electos que representen a todas las personas a las que sirven.

Las finanzas públicas de la región de ALC muestran modestos signos positivos, tras un marcado deterioro en 2020. Este deterioro se debió a las medidas de emergencia adoptadas para luchar contra la pandemia de COVID-19, y a las medidas de apoyo a las empresas y a las personas para gestionar su impacto. Para el 2022, los balances fiscales -la diferencia entre los ingresos y los gastos de un gobierno en un año- ya se habían recuperado ampliamente a los niveles anteriores a la COVID en toda América Latina y el Caribe. Sin embargo, la recuperación económica sigue siendo frágil.

En 2022, Costa Rica tenía un déficit fiscal del 2.8% del PIB, por debajo del promedio de los países de ALC (3.4%), y una disminución sustancial desde el 6.7% en 2019. Los ingresos del gobierno representaron el 16.6% del PIB de Costa Rica en 2022, en comparación con el 31.5% en promedio en los países de ALC y el 39.7% en los países de la OCDE. Esta proporción de ingresos en relación con el PIB ha aumentado desde el 15% en 2019.

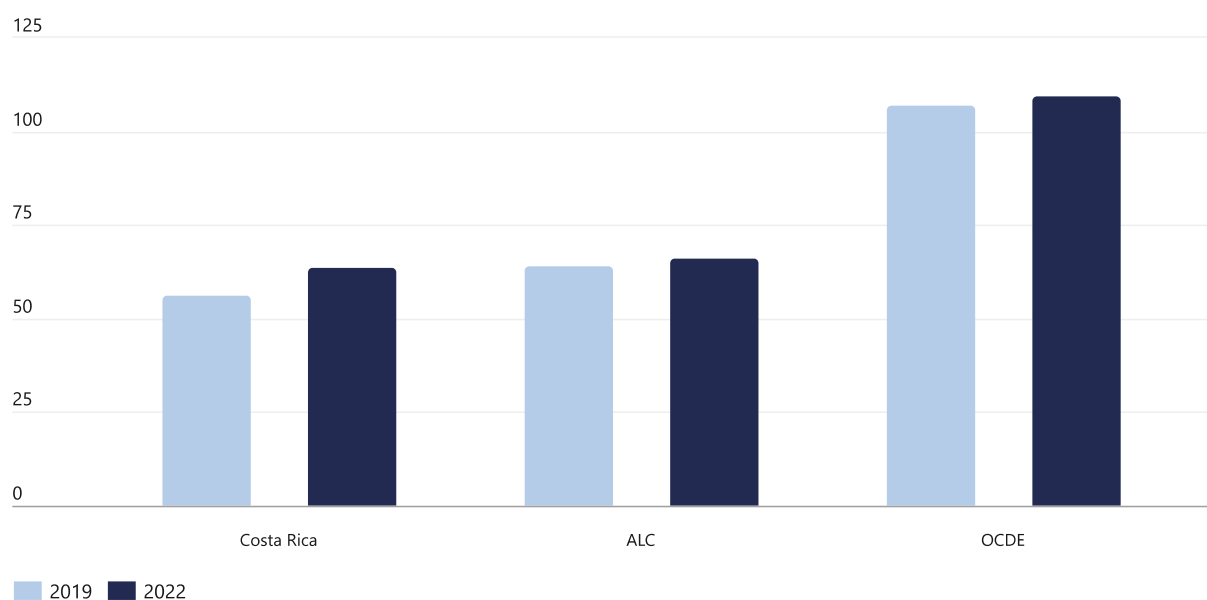
Gráfico 6. Balance fiscal de las administraciones públicas como porcentaje del PIB, 2007 - 2022



La deuda pública puede utilizarse para financiar tanto el gasto corriente como las inversiones, pero tiene un costo en forma de pago de intereses. La deuda como porcentaje del PIB aumentó durante la pandemia de COVID-19 en la región de ALC debido al aumento del gasto y a la pérdida de ingresos fiscales, y en 2022 aún se mantenía 2 p.p. por encima de su nivel de 2019.

En 2022, la deuda pública de Costa Rica ascendía al 63.8% de su PIB, por debajo del promedio de ALC del 66.3%. Su nivel de deuda ha aumentado desde el 56.4% del PIB en 2019.

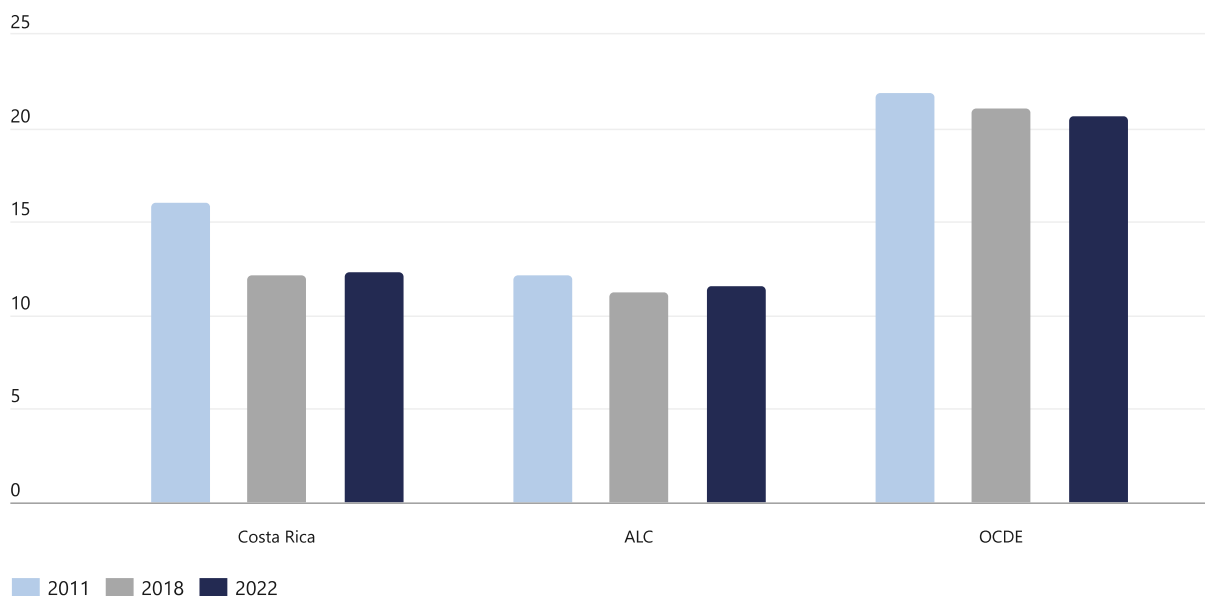
Gráfico 7. Deuda bruta de las administraciones públicas como porcentaje del PIB, 2019 y 2022



Los empleados públicos están al frente del diseño y la formulación de políticas públicas y de la prestación de servicios públicos. La proporción del empleo público varía considerablemente en la región de ALC, desde menos del 5% del empleo total hasta más del 20%.

En 2022, el empleo público en Costa Rica era el 12% del empleo total, igual al promedio de ALC, e inferior al promedio de la OCDE del 21%. El empleo público en Costa Rica se ha mantenido estable entre 2018 y 2022.

Gráfico 8. Empleo del sector público como porcentaje del empleo total, 2011, 2018 y 2022



Notas para los gráficos

Los datos sobre finanzas públicas y economía proceden de la base de datos de Perspectivas de la Economía Mundial (WEO) del FMI (octubre de 2023), que se basa en el Manual de Estadísticas de Finanzas Públicas (MEFP) y se extrajeron el 3 de noviembre de 2023. Para los promedios de la OCDE, los datos se basaron en el Sistema de Cuentas Nacionales (SCN) y se extrajeron de la base de datos en línea Panorama de las Administraciones Públicas, que representa la última actualización disponible: 5 de enero de 2024.

El balance fiscal, también denominado capacidad (+) o necesidad (-) de financiación de las Administraciones Públicas, se calcula como el total de ingresos públicos menos el total de gastos públicos.

Los datos sobre empleo público proceden de la base de datos ILOSTAT de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y se extrajeron el 17 de febrero de 2023. Los datos se basan en la Encuesta de Población Activa. El empleo en el sector público abarca el empleo en el sector gubernamental más el empleo en empresas y sociedades residentes de propiedad pública.

Los promedios de ALC y la OCDE se refieren al promedio no ponderado, con la excepción de los indicadores de finanzas públicas.

Para más información, véase www.oecd.org/publication/government-at-a-glance-lac/2024/